

LA NUEVA COYUNTURA REGIONAL.
DEBATES URGENTES



**HONDURAS: ENTRE LA
CORRUPCIÓN, EL
NARCOTRÁFICO Y LA
INCONFORMIDAD SOCIAL**

**LETICIA
SALOMÓN**

La crisis del bipartidismo

Honduras se tambalea desde la crisis, aún sin resolver, expresada con toda su fuerza con el golpe de Estado de junio de 2009, hace un poco más de diez años. Desde entonces, no solo el sistema bipartidista profundizó sus grietas, sino que los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, antes cohesionados y resistentes al deterioro institucional, comenzaron a fragmentarse y a presentar fisuras de las que no parecen reponerse en el corto o mediano plazo. Uno de ellos, el partido Liberal, promotor visible del derrocamiento de un presidente de su propio partido para satisfacer intereses particulares de otro líder que por la vía electoral nunca hubiera tenido posibilidades de llegar a la presidencia de la república, provocó tal nivel de desencanto entre sus seguidores que se han abstenido de ir a las urnas o han migrado hacia otra militancia, mientras la vieja dirigencia se resiste a dejar el control del partido y la nueva no termina de cimentar un control que restaure su imagen deteriorada ante la sociedad. El otro partido, el Nacional, que se alzó políticamente ganancioso del golpe de Estado, ha mantenido desde entonces el control de la presidencia de la república y, de forma creciente, el control del poder Legislativo, del poder Judicial y de otras importantes instituciones del Estado, concentrando el poder político en una sola persona, Juan Orlando Hernández, desde la presidencia del Congreso Nacional (2010-2014) hasta la presidencia del Ejecutivo de forma constitucional (2014-2018) y de forma inconstitucional (2018-2022). Este partido enfrenta hoy una grave fisura interna y un fuerte deterioro ante la sociedad, no sólo por la violación de la Constitución de la república al promover la reelección presidencial expresamente prohibida en la misma y apoyar el fraude electoral asociado a la reelección de 2017, sino por enfrentar señalamientos por corrupción y narcotráfico, en figuras destacadas de ese partido empezando por el mismo presidente de la república y otro expresidente, con el involucramiento de familiares cercanos, diputados al Congreso nacional, alcaldes y otros. La aparición de nuevos partidos en el escenario político con fuerza suficiente para capitalizar el quiebre del bipartidismo y recoger la insatisfacción social expresada en las calles una y otra vez, como Libertad y Refundación (LIBRE), tienen que consolidarse política e ideológicamente y diferenciarse sustancialmente de los que han sido los dos partidos tradicionales del país.

La remilitarización del Estado

El golpe de Estado de 2009 no sólo abrió las puertas de la fragmentación y desprestigio del sistema bipartidista, sino también de la restauración creciente del poder de los militares, quienes dejaron los cuarteles y empezaron a incursionar con fuerza y desesperación en otras funciones del Estado que les permitieran recuperar presencia, presupuesto y beneficios personales. El punto central y estratégico fue la militarización de la seguridad pública para apropiarse de una situación de grave deterioro y preocupación ciudadana, como la delincuencia común, pero también para controlar el combate al narcotráfico, tema sensible para Estados Unidos que, al igual que el otro, podía redituales enormes beneficios y prebendas. En función de esta tarea, hábilmente asumida como función constitucional, obviando la caracterización de esta como apoyo y no como sustitución de la conducción civil, los militares entraron con fuerza a restaurar su viejo papel represivo, asumiendo ahora el papel político de reprimir a los opositores, a aquellos que cuestionan y señalan el poder vertical y autoritario ejercido por el presidente de la república y su partido, alineándose institucionalmente con la concentración del poder político

Pero el acaparamiento de otras funciones civiles va más allá, en función del desmantelamiento del Estado propiciado de forma creciente por el actual presidente de la república, quien les acaba de asignar recientemente la conducción de un plan de desarrollo agrícola sustituyendo a varias instituciones del Estado a las que les compete esta función y con la asignación de una cantidad millonaria de recursos financieros a ser utilizados en un horizonte de cinco años que trascienden los dos años que le quedan en el ejercicio de la presidencia de la república.

El desborde de la corrupción

En los últimos cinco años se ha desbordado el fenómeno de la corrupción en el país, en particular en torno al gobernante, su familia, el gobernante anterior, su familia y muchos diputados de su partido que han sido señalados por periodistas, el Consejo Nacional Anticorrupción, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como responsables directos del desvío de recursos destinados a los más pobres tanto para financiar sus campañas electorales como para beneficio personal y familiar. La visibilidad de la corrupción en un partido que lleva diez años en el poder ha impactado a la sociedad hondureña de tal manera que se lanzó a las calles en 2015 a través del Movimiento de los Indignados o Movimiento de las Antorchas demandando durante varios meses investigación, castigo y salida del presidente de la república, sin lograr su objetivo central pero sí la constitución de una misión internacional con el apoyo de la OEA que logró desarrollar y presentar varias líneas de investigación que puso en precario al presidente y su familia, al punto de que, como consecuencia, están a punto de dar por finalizado el convenio que le dio creación o, en su defecto, reducir sus funciones a un simple acompañamiento de instituciones que, por su fuerte politización partidaria, difícilmente pueden mantener una lucha frontal y de fuerte impacto ante el fenómeno extendido de la corrupción en el país. Es cierto que hubo corrupción en el pasado, inclusive hubo muchos escándalos de corrupción en gobiernos anteriores, incluidos los gobiernos militares que accedieron al poder a través de los clásicos golpes de Estado. Pero en ningún momento de la historia la corrupción presentó un proceso de expansión tan acelerado y diverso, en particular por la dimensión del saqueo en la cúpula del aparato estatal y por la voracidad desmedida que arrasa con toda vergüenza y vestigio de solidaridad social con los más pobres y excluidos que es, en última instancia, a quienes les arrebatan toda posibilidad de acceso al desarrollo y de reducción de la brecha de desigualdad. La decisión del gobierno de establecer un convenio con la OEA era para lanzar la idea de que sí se combatía la corrupción, pero se esperaba que fuera la corrupción de otros, de la parte inferior de la pirámide burocrática del Estado, de los ajenos y lejanos, pero no la corrupción de la cúpula que ha saltado indignada en medio de la impunidad que caracteriza al país y ha tomado todas las medidas legislativas y de procedimientos para blindarse ante el embate de la justicia y de las instancias competentes.

El narcotráfico en la política

Como era de esperarse, la lucha contra el narcotráfico en la que se comprometió el actual gobernante con Estados Unidos, terminó salpicando a policías, militares, diputados, alcaldes, parientes cercanos del gobernante actual y del anterior gobernante de su mismo partido, llegando inclusive a ser mencionados como co- colaboradores de narcotraficantes en el juicio que se ventiló en el Distrito Sur de Nueva York contra un hermano del actual presidente, el cual resultó culpable de los cuatro delitos por los que fue acusado.

Ese juicio, más allá de juzgar a un narcotraficante de altos vuelos, como fue calificado por los mismos fiscales que llevaron el juicio, sentó en el banquillo de los acusados a toda la institucionalidad del Estado hondureño y a buena parte de la clase política criolla que aprendió a convivir con el narcotráfico, a aprovecharse de él y a asegurar su apoyo en las campañas electorales. Es un señalamiento a la falta de voluntad política e ineficiencia del Ministerio Público, la policía, las fuerzas armadas, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas, el poder Ejecutivo, el poder Legislativo y tantas otras que han conducido a muchos analistas a pensar que Honduras se ha convertido en un Narcoestado, más allá de un simple y coyuntural narcogobierno, lo que presagia un mal futuro para el país en general y para el sistema de partidos en particular.

La inconformidad social

A diferencia de los otros países centroamericanos, en particular Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en Honduras no hubo guerra civil y, por ello, ninguna firma de Acuerdos de paz para reconciliar a la familia hondureña. Ello se debió en buena medida, al hecho de que siempre los procesos reformistas llegaron a tiempo para diluir la conflictividad social y mediatizar la conflictividad política. El golpe de Estado de 2009 echó por la borda todo lo anterior y enfrentó a la sociedad hondureña a una profunda escisión en dos bandos confrontados: los que estaban (y aún lo están) a favor del golpe y el derrocamiento de un presidente legalmente electo; de su destitución por un poder Legislativo que no tenía las competencias para hacerlo; de la represión a la población que se opuso a tal aberración jurídica y política; y de la restitución del poder a las fuerzas armadas; el otro bando, plural, amplio y diverso, se opuso (y sigue oponiéndose) al retroceso, a la barbarie y al retorno a la época más negra de la historia del país en términos de persecución y represión.

Esa sociedad que se indignó ante el cinismo de los golpistas y que salió a las calles durante muchos meses, combatiendo el síndrome de la coincidencia, se enfrentó a policías y militares que reprimían y sofocaban con gases lacrimógenos una y otra vez, despertando una conciencia social sobre lo que realmente acontecía en el país. Esa misma sociedad salió nuevamente a las calles en 2015 a protestar contra la corrupción en el gobierno y se mantuvo perseverante durante muchos meses. Y también salió a las calles a protestar contra el fraude electoral de 2017, volviéndose visible y aguantando la fuerte represión gubernamental, hasta que se cansó y se hartó de todo y de todos: de los políticos corroídos por la corrupción y contaminados por el narcotráfico; de la represión generalizada, asfixiante y persistente; y asumió la impotencia ante un gobernante que cuenta con el control directo de la represión militar y policial; la represión jurídica a través de la ley antiterrorista que adjudica esta categoría a todos los que se oponen, protestan y luchan; el control ideológico a través de los medios de comunicación corporativos y de las cúpulas de las iglesias católica y evangélica que se han alineado incondicionalmente con el gobernante; de la empresa privada sigilosa, temerosa, oportunista y acomodada.

Esa sociedad frustrada, decepcionada y cansada plantea un enorme desafío al sistema de partidos, específicamente a su liderazgo, que no posee la legitimidad y fuerza suficiente para asumir la convocatoria a las calles, sustituyendo el llamado a movilizaciones anteriores caracterizadas por la fuerza, el entusiasmo, la valentía y la creatividad social más que política. Lo terrible y dramático para el país es que el desencanto social con lo político, sumado a la certeza de la existencia de un Estado fallido ante las necesidades de la sociedad, combinado con la constatación cotidiana de tener un narcoestado, impulsa a la gente a irse del país, a huir de todo esto y buscar oportunidades a través de la migración hacia Estados Unidos o Europa. Si a esto se suma el endurecimiento de las condiciones para migrar y la obligación de quedarse en un país en el que ya no quieren y no pueden vivir, podemos afirmar que se presenta sombrío el panorama para el futuro cercano, en particular para los partidos políticos que enfrentan la disyuntiva de reformarse o decaer, y restaurar la capacidad de fascinación, de crear esperanza y de generar nuevas oportunidades.

Notas.

1. Leticia Salomón es Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) en temas de gobernabilidad, defensa, seguridad y otros. Ha sido integrante del Comité Directivo de CLACSO y ha dirigido el Consejo de Investigación del SICAR/CSUCA y la Dirección de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad nacional Autónoma de Honduras

Crédito de la foto: @daviddelapaz

